

<https://www.elcorreo.eu.org/Se-profundiza-la-guerra-por-los-bienes-comunes-en-EcuadorRaul-Zibechi>

# Se profundiza la guerra por los bienes comunes en EcuadorRaúl Zibechi

- Les Cousins - Équateur -

Date de mise en ligne : lundi 2 novembre 2009

---

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

---

Por Raúl Zibechi \*

IRC. Canadá, 19 de octubre de 2009.

[Lire en français](#)

[Read in english](#)

A fines de septiembre se registró un nuevo levantamiento indígena en Ecuador, esta vez en defensa del agua, amenazada por la minería a cielo abierto. Las organizaciones indias se enfrentaron ahora a un gobierno que se proclama antineoliberal, partidario del "socialismo del siglo XXI" y que impulsa una "revolución ciudadana."

"Lo que pasó en Cochabamba con la guerra del agua, va a resultar miniatura al lado de lo que se viene en el Ecuador, se viene un levantamiento, porque se viene", afirma convencido Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay [1]. Su punto de referencia es la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, una vasta insurrección social que revirtió la privatización y dio inicio, en abril de 2000, al ciclo de protestas que llevó a Evo Morales al gobierno.

"Mis padres me enseñaron que el agua y la candela se comparten, no se venden", dice casi indignado en camino hacia una asamblea comunitaria en La Victoria del Portete, en un inmenso y rico valle a quince kilómetros de Cuenca (capital de la sureña provincia del Azuay), la hermosa ciudad colonial plagada de turistas. Cuando gira por la carretera Panamericana hacia la derecha, señala la casa de sus padres, donde nació hace poco más de 40 años.

"De niño iba a una vertiente a buscar agua con un cántaro de barro. Se tapaba con el pocón, la hoja del maíz que es biodegradable. Nunca me imaginé que algún día iba a comprar una botella de agua, nunca. Cada litro vale un dólar y 30 centavos o sea que el litro de agua cueste más que el litro de leche y el litro de petróleo. La lucha por el agua va a ser la lucha por la vida". La diferenciación social provocada por los remeses de los emigrantes puede verse a simple vista : al lado de casas humildes con techos de chapa, se levantan casonas de tres pisos, con vocación de mansiones, por más que sus propietarios siguen siendo campesinos.

Carlos Pérez es quichua y abogado especializado en derecho comunitario con posgrados en temas ambientales, con un destacado libro sobre justicia comunitaria. En los últimos años dedica todos sus esfuerzos a resistir la instalación de empresas mineras de nombres elocuentes como IAM Gold, en las alturas de Quimsacocha, donde nacen las vertientes que irrigan el valle en el que miles de campesinos practican la ganadería. Pertenecer a una nueva generación de dirigentes indios, formados en universidades, que hablan varios idiomas, viajan a foros internacionales y dominan las nuevas tecnologías, pero se mantienen apegados a sus comunidades y siguen hablando sus lenguas originarias.

Cuando llegamos a Victoria del Portete, estaciona al costado de la carretera donde se amontonan varios centenares de comuneros en una amplia explanada entre la junta parroquial y la iglesia. Sube al balcón municipal y da por comenzada una asamblea del sistema local de agua que deberá tomar decisiones importantes. "Si los gobiernos anteriores nos amenazaban con la privatización de nuestros sistemas de agua, ahora ese fantasma ha desaparecido pero tenemos otro, la minería es la mayor amenaza", dice antes de abrir el evento.

En esta región funciona el Proyecto Nero desde hace 24 años, quizá el sistema comunitario de aguas más grande del país ya que abastece a 6 mil familias, unas 30 mil personas de 45 comunidades. "Las familias inicialmente se asentaban cerca del río o cerca de la vertiente, nunca cerca del camino porque preferían estar cerca del agua.

Luego los ríos se contaminan y las vertientes quedan pequeñas y eso hace que en los años 60 y 70 aparezcan organizaciones como Cáritas que instalan bombas manuales en los centros parroquiales donde la gente hacía fila para obtener agua. Pero otros comienzan a pensar en hacer todo el tendido, en mingas comunitarias, y ya no hubo necesidad de acarrear en la espalda sino por primera vez tener el grifo en casa", relata Pérez la historia de su comunidad.

Con los años los sistemas comunitarios de agua se difundieron a todo el país. Sólo en la provincia de Azuay hay 450 sistemas, que abastecen al 30 por ciento de la población, sobre todo en las áreas rurales y en las periferias urbanas. En todo el Ecuador serían unos 3.500 sistemas de agua, construidos, mantenidos y administrados por las propias comunidades.

### Un levantamiento diferente

El 27 de setiembre la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) comenzó un nuevo levantamiento contra una ley de aguas en la que no han participado. La ley del gobierno llegó a mediados de agosto al parlamento pero ya en 2008 la CONAIE había elaborado su propio proyecto que no fue tenido en cuenta por el Ejecutivo.

La crítica de los movimientos es que la Ley de Recursos Hídricos permite el desarrollo de proyectos mineros en nacimientos de agua, asegura la provisión de aguas para las mineras pero no para las comunidades indígenas y campesinas, y no resuelve el tema urgente de la contaminación de los cursos. Además, pretende englobar a los sistemas de agua en una autoridad estatal centralizada, con lo que las comunidades perderán el control sobre el recurso.

Ricardo Buitrón de Acción Ecológica, realizó un pormenorizado estudio de la ley y opina que "contiene elementos privatizadores, como que se transfiera el uso del agua con el dominio de la tierra y el uso para la industria o negocio a otros destinos, que la infraestructura hidráulica sea propiedad de los particulares, que las aguas superficiales retenidas -humedales- sean parte integrante de los predios" [2]. De ese modo se permite que las aguas sean adquiridas por quienes compran tierra y les den el uso que crean conveniente.

Critica, además, que la ley no tenga elementos que permitan la desprivatización, para poder revertir las aguas que ahora están en manos privadas. Y que las miles de juntas de agua potable no tengan participación real, ya que sus miembros pasan a ser simples usuarios sometidos a una Autoridad Única estatal que tiene bajo su control toda la red hidráulica.

Humberto Cholango, dirigente de Ecuarunari, la organización quichua de la sierra, aportó datos elocuentes en la conferencia de prensa del 24 de setiembre [3]. El 45 por ciento de las aguas están legalmente concesionadas, pero el 55 por ciento se utilizan ilegalmente ; el 1 por ciento de los usuarios consumen el 64 por ciento del caudal y el 86 por ciento de los ecuatorianos acceden sólo al 13 por ciento del caudal. "La ley no dice nada sobre estos puntos, y el Plan Nacional de Desarrollo favorece a las mineras y la floricultura".

La ley no contempla sanciones por contaminación ni control de la calidad del agua. "El derecho humano al agua se lo restringe solo al acceso al agua potable y de uso doméstico sin considerar el derecho vinculado a la salud, la soberanía alimentaria y la cultura", añade Buitrón.

Cholango, por su parte, insistió en el papel de las comunidades indígenas en la construcción de las redes de agua : "Nosotros hemos construido canales de riego, sistemas de agua de consumo, y ahora con esta Ley desde el Ejecutivo quieren que simplemente seamos usuarios y no actores, inclusive en el artículo 97 llegan a plantear el

control y administración exclusivo de la Autoridad Única a los sistemas comunitarios. Esto es un atentado a nuestras juntas de agua" [4]. El resultado, en su opinión, es que la ley prioriza el agua para la explotación minera.

Cuando se inició la protesta, con cortes de carreteras y manifestaciones, para forzar al gobierno a dialogar y escuchar su propia Ley de Aguas inspirada en el Sumak Kawsay, el Buen Vivir que avala la Constitución, la respuesta del presidente Rafael Correa fue muy dura. "¿Qué se creen esos dirigentes ?", dijo. Los acusó de "extremistas", de "hacerle el juego a la derecha" y de golpistas, al comparar la coyuntura ecuatoriana con la de Honduras [5].

El 30 de setiembre la policía disparó sobre indígenas shuar en la provincia amazónica de Morona Santiago. Según un comunicado de Acción Ecológica, Bosco Wizuma, profesor bilingüe, falleció víctima de un disparo cuando formaba parte de un grupo de 500 personas que bloqueaban el puente sobre el río Upano. Al parecer fue un "engaño", ya que los dirigentes fueron llamados a un diálogo "para distraer la atención de la dirigencia y los medios de comunicación locales" [6].

Hubo además decenas de heridos, incluyendo varios policías. Rápidamente el presidente Correa cambió el discurso y llamó al diálogo : "Bienvenidos hermanos. Este gobierno es de ustedes, de los pueblos indígenas, el Palacio de Carondelet es de ustedes" [7]. Tal vez era la única forma de desactivar un conflicto que amenazaba la estabilidad de su gobierno. En efecto, aunque el levantamiento no comenzó con la potencia de otras acciones indias, se fueron sumando los profesores y otros sectores sociales. Pero cuando hay un muerto, todo es posible.

Diálogo y tensión

La dirigencia de la CONAIE decidió suspender las medidas de lucha cuando el gobierno abrió un tiempo de negociación. Sin embargo, en buena parte del país las bases, o sea las comunidades, siguieron cortando rutas y cerrando mercados. Hay división entre las organizaciones que integran la CONAIE, en particular entre la sierra (Ecuarrunari) y la selva (Confeniae).

El clima de desconfianza no retrocedió. El lunes 6 se inició el diálogo directo televisado en la sede de gobierno, el Palacio de Carondelet. Miles de indios se concentraron durante días en las afueras aguardando resultados. Ciento treinta dirigentes ingresaron a Palacio y se reunieron con Correa en un clima de tensión. El primer día se llegó a seis acuerdos : institucionalizar el diálogo permanente entre las dos partes, que el gobierno tomará en cuenta la propuesta de Ley de Aguas de la Conaie y se recibirá una propuesta de parte del movimiento indígena sobre la Ley Minera, entre los más destacados.

Un buen ejemplo del clima que se vive en las negociaciones es el siguiente diálogo. "Marlon Santi, titular de la CONAIE, pidió respeto hacia los indígenas. Sus palabras tenían relación con declaraciones en las que se les calificó de 'locos' y que no tenían representatividad. El reclamo fue directo. Correa interrumpió y pidió los nombres de los funcionarios para 'de inmediato cancelarlos del Gobierno. ¿Quién es ese estúpido ?', preguntó Correa dos veces. 'Usted, Presidente', respondió el dirigente" [8].

Las organizaciones indígenas lograron institucionalizar el diálogo, tal como pretendían. El 14 de octubre el Ejecutivo emitió el Decreto No. 96 que establece la formación de una Comisión Mixta integrada por la CONAIE y sus tres filiales (Costa, Sierra y Amazonia) y por el gobierno el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y diversas instituciones. Esa comisión debatirá las dos leyes de aguas (estatal y de los indígenas) así como las propuestas para reformar la Ley de Minería vigente.

Pero el cruce de acusaciones continúa, Luego de la transmisión de los sábados de Correa, la dirigente amazónica y ex asambleísta Mónica Chuji, acusó al presidente de racista : "Me ratifico en que las palabras, gestos y acciones del

Presidente lo caracterizan como un racista. Tildar a los líderes indígenas de 'caretucos', 'pelucones' y 'ponchos dorados' son expresiones racistas. Usar el kichwa para propósitos demagógicos y luego negar su oficialización es una actitud racista. Minimizar a la población indígena ecuatoriana reduciéndola a un voto en las urnas es una actitud racista" [9].

Aunque es importante que el conflicto se haya desactivado, ya que el precedente de la masacre de Baguá [10], en Perú, hizo temer lo peor, las diferencias siguen siendo importantes. Pepe Acacho, presidente de la Federación Shuar (de la Amazonia), no está conforme con las resoluciones : "Hemos estado ocho días en lucha y no es justo que no consigamos que se declare a Morona Santiago como una provincia ecológica, libre de la minería y la explotación petrolera" [11].

### El modelo de país como problema

La nueva Constitución ecuatoriana es una de las más avanzadas del mundo en materia ambiental, a tal punto que define a la naturaleza como sujeto de derecho. La Constitución fue aprobada el 28 de setiembre de 2008 por el 64 por ciento de los ecuatorianos en plebiscito popular. "La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos", señala el artículo 71º, consagrado a los "Derechos de la Naturaleza".

El problema es la minería a cielo abierto, por la que el gobierno de Correa ha hecho una fuerte apuesta. Alberto Acosta, fundador del movimiento Alianza País que llevó a Correa a la presidencia, y ex presidente de la Asamblea Constituyente, enarbola un discurso muy cercano al de los movimientos indios : "La ley de minería aprobada después de la Constitución, está poniendo en peligro la Carta Magna. Ese es el problema de fondo. ¿A qué se debe esto ? Sin duda alguna a las incoherencias de un gobierno que todavía tiene unas políticas claramente inspiradas en el manejo neoliberal, que todavía representa intereses de los grupos económicos más tradicionales" [12].

Acosta sostiene que los gobiernos progresistas sudamericanos "no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista", aún los "más avanzados" como Venezuela, Bolivia y Ecuador. En su opinión, la firme creencia de que "vía la extracción de los recursos naturales vamos a encontrar el camino del desarrollo" ha impedido hasta ahora superar ese modelo y, por lo tanto, buscar "una nueva forma de inserción en el mercado internacional".

Un segundo problema es el propio Correa. Acosta dice que recién entró a la vida política en 2005, cuando en Ecuador se suceden los levantamientos indios desde 1990. Tiende a pensar en términos personales : "Está asumiendo el papel de portador de la voluntad política colectiva, y no se da cuenta que gran parte del proceso histórico anterior es el que explica los resultados positivos de Correa y de Alianza País". La ausencia de una estructura orgánica, movimiento o partido, lleva a Correa, en opinión de Acosta, a no comprender "que él está ahí, en la presidencia, gracias a todo el esfuerzo realizado por la sociedad ecuatoriana" [13].

El economista Pablo Dávalos coincide en este enfoque pero además cree que el de Correa sigue siendo un gobierno neoliberal. El capital tiene hoy necesidad de "vincular los territorios a la vorágine de la especulación financiera" como forma de superar la crisis [14]. Los movimientos han declarado la región sur-amazónica de Zamora y Morona como territorios libres de minería. La colisión con las multinacionales mineras parece inevitable.

En el gobierno de Correa, y este es un punto clave, hay destacados miembros de la derecha así como en el partido que lo sostiene, Alianza País. En consecuencia, concluye Dávalos, más allá de las declaraciones sobre socialismo y revolución, el movimiento de Correa forma parte de "la deriva del posneoliberalismo, es decir, como una

continuación del neoliberalismo pero bajo las modalidades de desposesión territorial y de recursos y de la desterritorialización del Estado".

La alternativa más seria parece el Proyecto ITT, para dejar el petróleo en tierra y buscar otro modelo de desarrollo [15]. ITT son las siglas de los tres pozos de exploración perforados en la zona del parque Yasuní, en la Amazonia (Ishpingo, Tambococha y Tiputini). A mediados del año 2009 el gobierno de Correa asumió el proyecto ideado por Acosta cuando fue ministro de Energía y Minas. La propuesta es no explotar el petróleo como contribución del Ecuador a la lucha contra el calentamiento climático.

Las reservas ITT representan el 20% de las reservas petroleras totales del país. La economía del Ecuador está basada en el petróleo : 22% del PIB, 63% de las exportaciones y 47% del Presupuesto del Estado dependen del petróleo. Pero ahí radica también el valor de la propuesta : evitaría la emisión de 410 millones de toneladas de CO2, frenaría la deforestación y la contaminación, y sería una gran contribución al desarrollo de una economía pospetrolera.

A cambio, el gobierno de Ecuador pide a la comunidad internacional una compensación equivalente al 50% de los ingresos que podrían conseguirse si se explotara ese petróleo. El parlamento y el gobierno alemán respondieron afirmativamente, aportando 50 millones de euros anuales durante los trece años que durarían los beneficios de esos pozos. Noruega y la Comunidad de Madrid han dado señales positivas.

Aunque hay muchos involucrados en este proyecto que supone una revolución ecológica, Acosta sostiene que "emergió en primer lugar de las luchas de resistencia de los pueblos indígenas, particularmente en el centro-sur de la Amazonia orientadas a impedir que la actividad petrolera se expanda hacia sus territorios, así como de los grupos de colonos mestizos en la Amazonia norte y de los pueblos indígenas afectados por la actividad de la compañía Chevron" [16].

\* **Raúl Zibechi** es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas ([www.ircamericas.org](http://www.ircamericas.org)).

*Post-scriptum :*

**Notas :**

---

[1] Entrevista a Carlos Pérez.

[2] Ricardo Buitrón, El Telégrafo, ob. cit.

[3] Ver conferencia de prensa en [www.youtube.com/watch?v=tN3x3vE1jFE](http://www.youtube.com/watch?v=tN3x3vE1jFE).

[4] Comunicado de Ecuarunari en Ecuachaski del 17 de setiembre de 2009.

[5] Agencia AFP, Quito, 25 de setiembre de 2009.

[6] "Noticias del Levantamiento en Defensa del Agua-1" en [www.accioecologica.org](http://www.accioecologica.org).

[7] El Comercio, Quito, 3 de octubre de 2009.

[8] El Comercio, 6 de octubre de 2009.

[9] Declaraciones del 11 de octubre en <http://ukhamawa.blogspot.com>.

[10] Ver "Masacre en la Amazonia : la guerra por los bienes comunes" en <http://www.ircamericas.org/esp/6181>.

[11] El Comercio, 6 de octubre de 2009.

[12] Entrevista con Alberto Acosta, 6 de setiembre de 2009.

[13] Idem.

[14] Pablo Dávalos, ob. cit.

[15] Matthieu Le Quang, entrevista a Alberto Correa ; Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Esperanza Martínez y Joseph H. Vogel, "Dejar el petróleo en tierra para el Buen Vivir : Elementos para una propuesta política, económica y ecológica para la iniciativa de no explotación petrolera en la Amazonia de Ecuador," Programa de las Américas Informe de la política (Washington, DC : Center for International Policy, 7 de julio de 2009) : <http://www.ircamericas.org/esp/6238>.

[16] Idem